



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

Dayana Vanesa Acosta
David Fernando Velasco Arce
Sergio Nicolás Zuluaga Zambrano

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

*Retos para la construcción
de la paz*



Adobe Spark



RESUMEN

El 4° punto del Acuerdo de Paz colombiano, denominado como la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas es indispensable para la construcción de paz, pues aunque el narcotráfico no se originó por el conflicto, lo ha financiado durante años. Por ello la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional crean este punto para ser implementado bajo un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, p. 98).

Sin embargo, en la realidad no se ha implementado como se plasmó en el acuerdo pues en su aplicación parece que se ha entregado un gran margen de maniobra al Estado para que actúe como garante en la solución de este problema, burocratizando las alternativas de respuesta al conflicto y haciendo más complicado que la sociedad civil alcance soluciones sólidas que la involucre efectivamente. Esto a su vez ha provocado, la desfinanciación del PNIS así como la suspensión de beneficios a las personas inscritas en este programa y le ha dado preponderancia a la erradicación forzada de cultivos al margen de la ley, lo que ha exacerbado la violencia. Por esto resulta necesario que se involucre a los grupos poblacionales afectados por este fenómeno para garantizar soluciones efectivas.



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

MEMORIA, RECONCILIACIÓN Y PAZ

INTRODUCCIÓN



El siguiente texto busca reflexionar sobre el 4° punto del Acuerdo de Paz; para esto, hará uso de fuentes secundarias que dejen en evidencia nuestra postura como grupo, la cual argumenta que no se ha involucrado plenamente a la sociedad civil dentro de la implementación que el Estado ha incumplido con varios aspectos del punto hasta la fecha. En este sentido, es necesario realizar una breve introducción especificando lo que pacta este punto del acuerdo para así lograr una contextualización del policy brief a trabajar.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP contiene un apartado específico sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que aunque el gobierno colombiano considera que este es de origen ajeno al conflicto, establece “que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. Que las instituciones, tanto en el nivel nacional como en el local, han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico en su integridad y desempeño. Que distintos sectores de la sociedad se han visto comprometidos de manera directa o indirecta con la producción y comercialización de drogas ilícitas” (INDEPAZ, 2020).



Por ello, este punto se considera transversal para erradicar cultivos ilícitos, claro está, haciendo plena diferencia entre el cultivos de los campesinos y las redes territoriales de narcotráfico y aplicando el Tratamiento Penal Diferenciado que permita al campesinado renunciar transitoriamente a cultivar o mantener este tipo de cultivos por medio de ajustes normativos a los cuales el gobierno se comprometió para evitar medidas punitivas. Así mismo, el Gobierno se comprometió “en poner en marcha las políticas y programas de este punto, para intensificar y enfrentar la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. Por su parte, las FARC-EP se comprometió en contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, a poner fin a cualquier relación en función de la rebelión” (Oficina del alto comisionado para la paz, 2021).

Además el punto 4° del Acuerdo debe trabajar en conjunto con el primer punto, la Reforma Rural integral, a través del enfoque territorial y participativo, dentro del marco del Programa de Sustitución para asegurar la recuperación de esos territorios, la reincorporación del campesinado a una economía legal y su participación en la planeación de sus regiones por medio de la creación de asambleas comunitarias que identifiquen las necesidades poblaciones en determinado territorio.

De igual manera, plantean hacer tratamiento de prevención del consumo de drogas por medio de un enfoque de salud pública y políticas que disminuyan los daños generados por esta problemática como estrategia para erradicar el problema de comercialización o narcotráfico. Por lo cual, según lo establece Dario Gonzales (2020): “ en suma, el Acuerdo, adopta el reto de transformar las condiciones de “pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico” (p.2).



ENFOQUE Y RESULTADOS

Desfinanciación de los programas de sustitución y suspensión de beneficios a las personas en tránsito hacia las economías legales: Relacionado con problemas administrativos y de carácter burocrático.

En cuanto a la desfinanciación del PNIS, se encontró que el Estado nunca le ha otorgado el presupuesto necesario para cumplir con sus objetivos, ya que según el Congreso de la República (2020) en 2019 se realizó una proyección de \$4.8 billones para aplicar este programa, pero entre 2019 y 2020 el presupuesto otorgado fue menor a los recursos solicitados, un 84% y un 38% menor respectivamente. Es por ello, que para el 2020 de los 2.1 billones de pesos solicitados solo se asignaron 191.000 millones de pesos dejando componentes como el de Asistencia Técnica Integral con poco presupuesto, ya que solo se cubrió el 17% de los pagos a las familias de cultivadores y no cultivadoras inscritas.

Así mismo, en 2019 se reportaron alrededor de 12.049 familias a nivel nacional que dejaron de ser parte o que no lograron hacer parte del PNIS por razones ajenas a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Esto debido a causas como:

"Gestión administrativa, retraso en el monitoreo o demoras en el desarrollo del programa. Esto evidente, en las denuncias hechas por la comunidad, brechas de tiempo entre la vinculación al programa y la presencia de cultivos ilícitos, causando que no se pudiera comprobar el rol de cultivador, resultando en su suspensión. También por no entregar una fotocopia del formulario de inscripción, a pesar de cumplir con los requisitos son excluidos del programa o porque otra persona del núcleo familiar vinculada al programa cotiza o empieza a cotizar a seguridad social por la cual no se considera que esta familia deriva su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". (Congreso de la República, 2020)

Independientemente de la razón para su suspensión como beneficiarios, esto no solo deteriora la relaciones de confianza del Estado y la población involucrada en esta problemática, sino que complica y ralentiza el camino de las familias cultivadoras y no cultivadoras al tránsito a la economía legal, lo que termina afectando su calidad de vida.

Un ejemplo de ello, es el testimonio de Sandra Cortés, una mujer de 44 años y madre de 11 hijos que afirma haber participado en el programa de sustitución de cultivos de coca, Turkewitz & Rios (2021):

“La decisión fue un acto de fe: requirió que su familia arrancara toda su cosecha, que representaba casi todo lo que poseían. A cambio, recibió un año de subsidios equivalentes al salario mínimo, un racimo de árboles frutales, algunos equipos agrícolas y visitas de un técnico que se suponía que le enseñaría una nueva habilidad. Ella quería criar ganado”.

“Pero pronto terminaron los subsidios, la mayoría de los árboles se murieron y el técnico desapareció. Ella nunca recibió los fondos ni los conocimientos técnicos para el ganado”.

“Desesperada, vendió su tierra a un vecino, dijo, y ahora pide dinero prestado para alimentar a sus hijos”

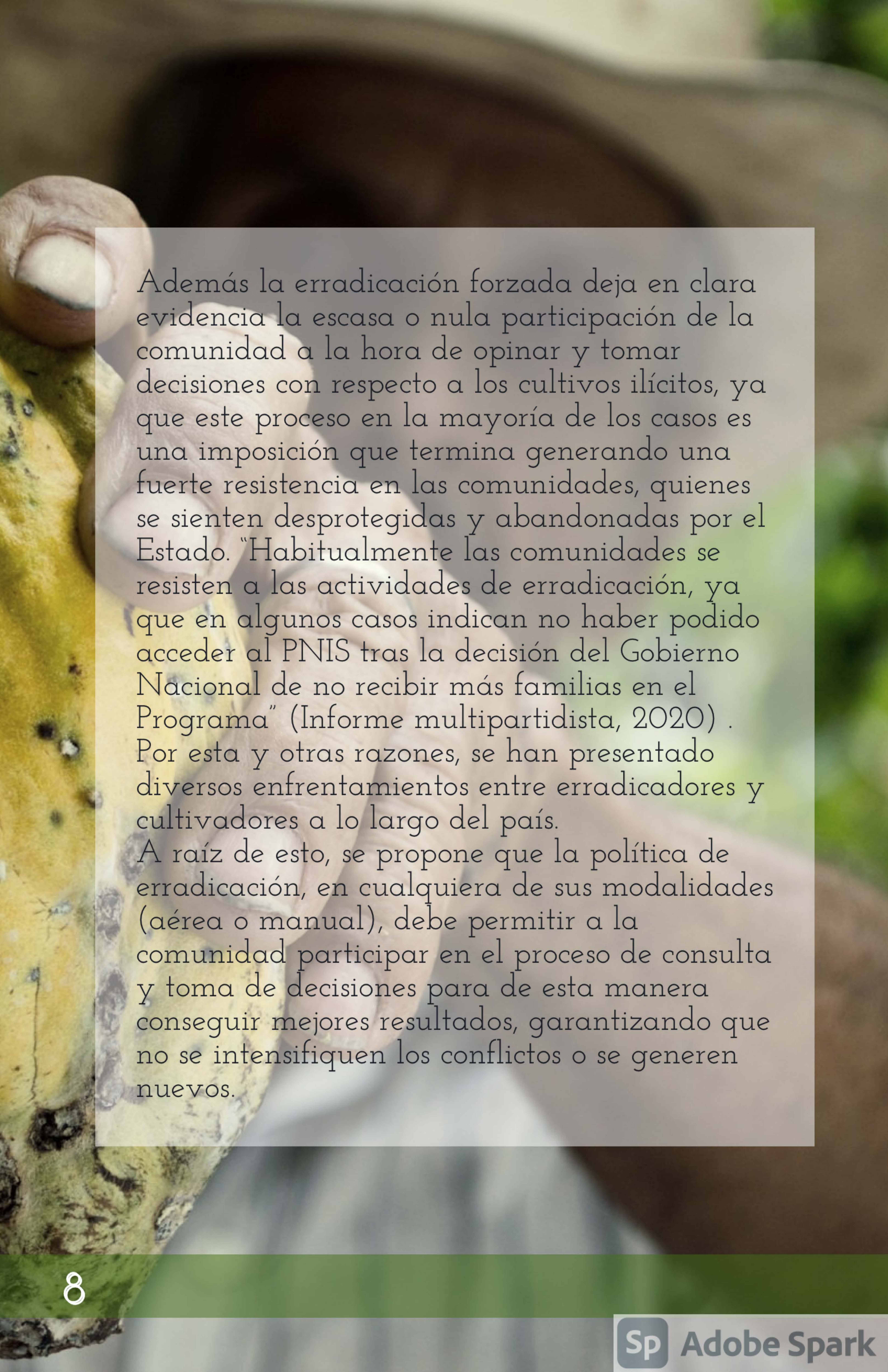


ENFOQUE Y RESULTADOS

Erradicación forzada de cultivos: Relacionada con un aumento de la violencia en los territorios.

Uno de los mayores problemas con los que se ha encontrado el Acuerdo de Paz a la hora de solucionar el problema de las drogas ilícitas es la desconexión que existe entre la percepción de seguridad, y el desarrollo y mejoramiento alternativo de las condiciones de vida de las personas inmersas en el cultivo de drogas. Esto es ejemplificado en las prácticas de erradicación forzada de cultivos como en la falta de apoyo de tipo económico y político a diversos programas, que buscan resolver este problema de manera diferente.

La erradicación forzada tanto aérea como manual, apoyada en gran medida por el actual Gobierno, parece haber incrementado la problemática de los cultivos ilícitos, ya que ha causado un desplazamiento de los mismos a los territorios colectivos y de protección ambiental, ha incrementado los niveles de violencia dentro de los territorios y además ha propiciado la pérdida de legitimidad de las autoridades del Estado. A pesar de esto, el Gobierno Nacional se mantiene firme en su posición de retomar las aspersiones aéreas con glifosato, buscando de esta manera disminuir el aumento de cultivos de uso ilícito, lo que ha intensificado los problemas de la población civil involucrada directamente en el asunto.

A close-up photograph of a person's hand holding a banana. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers wrapped around the fruit. The banana is yellow with some green at the top and some dark spots. A semi-transparent white rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing text. The background is blurred, showing more of the hand and the banana.

Además la erradicación forzada deja en clara evidencia la escasa o nula participación de la comunidad a la hora de opinar y tomar decisiones con respecto a los cultivos ilícitos, ya que este proceso en la mayoría de los casos es una imposición que termina generando una fuerte resistencia en las comunidades, quienes se sienten desprotegidas y abandonadas por el Estado. “Habitualmente las comunidades se resisten a las actividades de erradicación, ya que en algunos casos indican no haber podido acceder al PNIS tras la decisión del Gobierno Nacional de no recibir más familias en el Programa” (Informe multipartidista, 2020) . Por esta y otras razones, se han presentado diversos enfrentamientos entre erradicadores y cultivadores a lo largo del país.

A raíz de esto, se propone que la política de erradicación, en cualquiera de sus modalidades (aérea o manual), debe permitir a la comunidad participar en el proceso de consulta y toma de decisiones para de esta manera conseguir mejores resultados, garantizando que no se intensifiquen los conflictos o se generen nuevos.



CONCLUSIONES

El cuarto punto del Acuerdo de paz se enfrenta a un grave problema de implementación mientras no se le asegure la correcta participación a la comunidad en el tema de los cultivos ilícitos y mientras se de un proceso de implementación que está condicionado por las disposiciones que cada nuevo gobierno decida tomar según sus intereses particulares. A pesar de que hace algunos años se vienen desarrollando esfuerzos para terminar con el problema de las drogas ilícitas en el país, estos se han caracterizado por ser muy prohibicionistas, privilegiando estrategias que atentan en contra de las comunidades por no considerar los matices y la interiorización de este problema dentro de las dinámicas sociales.

El programa PNIS juega un papel esencial como estrategia para la erradicación de los cultivos ilícitos y el tránsito hacia la economía legal de miles de colombianos, sin embargo, el Estado nunca ha dispuesto los recursos necesarios para cumplir con cada uno de sus componentes, comprometiendo la efectividad misma del programa. De igual forma, diferentes contratiempos de tipo administrativo han generado que muchas familias sean suspendidas como beneficiarias, incluso si cumplen con los requisitos para ingresar o mantenerse en el programa, provocando la desconfianza de la comunidad en el Estado ante la falta de cumplimiento y la precariedad de las condiciones de vida de los agricultores.

La erradicación forzada ha generado un incremento de los conflictos en varios de los territorios en donde se practica, ya que que afecta directamente a las comunidades, deteriorando el medio ambiente y agotando los medios de vida de muchos campesinos que ven en la siembra de cultivos ilícitos la única forma de subsistir. Es por esto que se hace necesario un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos, en la cual se incluya la voz de las comunidades más afectadas, para que así se logren soluciones duraderas que garanticen el sostenimiento de la paz y el desarrollo de mejores condiciones de vida para los cultivadores.

RECOMENDACIONES

1

Es necesario que programas como el PNIS se implementen como política de Estado y no de gobierno, para que se le garantice el presupuesto que requiere para su aplicación, y así dejar de depender de la voluntad política del gobierno de turno.

2

Cambiar la estrategia que se ha venido utilizando para lucha en contra de los cultivos ilícitos, buscando asegurar la participación de las comunidades involucradas y dejando a la erradicación con glifosato como un opción secundaria o nula.

3

Involucrar a la comunidad a través de las asambleas comunitarias para que evalúen los programas enfocados a resolver el problema de las drogas y cultivos ilícitos.



REFERENCIAS

Congreso de la República. (2020, septiembre). ¿Cómo va la solución al problema de las drogas ilícitas? Retos y recomendaciones. Informe O5: Seguimiento multipartidista a la implementación del acuerdo de paz.
https://ce932178-d58f-4b70-96e7-c85e87224772.filesusr.com/ugd/883ff8_bcd7ecdb44a14de7859839cf849c35cb.pdf

Explicación puntos del acuerdo. (n.d.). Gov.Co.
<https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/811/explicacion-puntos-del-acuerdo/>
Gobierno nacional, & FARC-EP. (2016). Departamento Nacional de Planeación. Gov.co.
<https://portalterritorial.dnp.gov.co/PlanMarcoImplementacion/>

Grattan, S. (2021, 28 septiembre). Colombia's aerial fumigation push fuels fear of coca conflict. Drugs News | Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/28/colombia-coca>

Turkewitz, J., & Rios, F. (2021, September 26). "Fue una mentira": críticas y retardos marcan los cinco años del acuerdo de paz en Colombia. The New York Times.
<https://www.nytimes.com/es/2021/09/26/espanol/acuerdo-de-paz-colombia.html>